



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-016-2017-01043-02 (O2-22-393)
Accionante: ISABEL CRISTINA DE FÁTIMA GALLEGO SUÁREZ
Accionada: COLPESIONES E.I.C.E. Y AFP COLFONDOS S.A.
Procedencia: JUZGADO DIECISÉIS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA No. 0011
Asunto: INEFICIACIA DEL TRASLADO RPMPD-RAIS Y PENSIÓN DE VEJEZ

En Medellín, a los dieciséis (16) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-016-2017-01043-02 (O2-22-393), instaurado por ISABEL CRISTINA DE FÁTIMA GALLEGO SUÁREZ en contra de COLPESIONES E.I.C.E. Y AFP COLFONDOS S.A., con el fin de resolver el Recurso de Apelación impetrado por la parte demandante y las accionadas AFP COLFONDOS SA y COLPENSIONES E.I.C.E., así como el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de la entidad pública accionada, respecto de la sentencia que selló la primera instancia, proferida el 10 de mayo de 2022 por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

La señora ISABEL CRISTINA DE FÁTIMA GALLEGO SUÁREZ actuando a través de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de COLPENSIONES E.I.C.E. y la AFP COLFONDOS S.A. en procura de obtener la nulidad o ineficacia del traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, con la consecuente devolución a la administradora del RPMPD de la totalidad de los aportes realizados y la reactivación de la afiliación en este régimen pensional.

De igual manera, requiere de COLPENSIONES E.I.C.E. el reconocimiento y pago de la pensión de vejez bajo las directrices del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, a partir de la fecha en que acreditó los requisitos mínimos para acceder a esta prestación, junto con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

A manera de pretensión subsidiaria y solo en caso de no salir adelante la ineficacia o nulidad de traslado del régimen pensional, peticiona se ordene a la AFP COLFONDOS S.A. reconocer la pensión de vejez en las mismas condiciones y parámetros que le fueran aplicables de haber permanecido afiliada al RPMPD, con los respectivos intereses de mora.

En respaldo de sus aspiraciones señala que nació el 25 de abril de 1960, por lo que a la fecha de presentación de la demanda alcanzó los 57 años de edad; que se afilió al Instituto de Seguros Sociales y en virtud de ello, cotizó un total de 408 semanas en el lapso comprendido entre el 30 de septiembre de 1980 y el 16 de octubre de 1992. Relata que prestó sus servicios personales a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entre el 11 de noviembre de 1992 y el 15 de junio de 2000, efectuando aportes a través de CAJANAL.

Sigue refiriendo que para el mes de junio de 2000 se trasladó al RAIS a través de la AFP COLFONDOS S.A., aclarando que no se le suministró información suficientemente veraz y comprensible sobre el funcionamiento de dichos fondos y las repercusiones que comportaba el traslado. Así tampoco se le informó las características sustanciales del RAIS, como lo es la conformación del capital necesario para financiar su pensión y las modalidades existentes para el reconocimiento de la prestación; falencias que reprocha al considerar a la AFP COLFONDOS S.A., como una institución idónea y especializada, con conocimiento y experiencia para dar información a los ciudadanos sobre su funcionamiento en RAIS para efectos de financiar las pensiones de vejez.

En lo que respecta a la prestación pensional por vejez, sostiene que la densidad de semanas cotizadas con las que actualmente cuenta le permite acceder a una pensión de vejez en el RPMPD, destacando que si bien en su cuenta de ahorro individual – CAI le figura un total de \$314.755.866,00, que le permite también acceder una pensión en el RAIS, se presentan sendas diferencias en su financiación, como lo es por ejemplo la cuantía de la primera mesada pensional, pues mientras que en el RAIS la misma asciende a la suma de \$1.335.969, en el RPMPD el valor oscila entre \$4.161.203,11 y \$4.161.203,11.

Cuenta que el 30 de agosto de 2017 presentó reclamación administrativa ante COLPENSIONES E.I.C.E., sin que a la fecha haya obtenido una respuesta a sus pedimentos.

1.1 Trámite de primera instancia

La demanda se admitió el 07 de marzo de 2018 (doc.07, carp.01), y se notificó a las demandadas COLPENSIONES E.I.C.E. y AFP COLFONDOS S.A. el 02 de abril de 2018 y el 29 de agosto de ese mismo año, respectivamente (docs.009 y 017, carp.01), dándose aviso también de la existencia del presente proceso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Procurador Judicial Delegado en Asuntos Laborales el 02 de abril de 2018 (dosc.008 y 010, carp.01).

COLPENSIONES E.I.C.E., al momento de dar respuesta al escrito demandatorio aceptó como ciertos los hechos que hacen referencia a la fecha de nacimiento de la accionante y su afiliación al Instituto de Seguros Sociales; a los demás hechos respondió que no eran ciertos o no le constaban. Es así que se opuso a la prosperidad de las pretensiones, proponiendo en su defensa las excepciones de mérito que denominó como inexistencia de la ineficacia de la afiliación al RAIS, buena fe de Colpensiones, imposibilidad de condena en costas y la innominada (doc.014 y 015, carp.01).

La AFP COLFONDOS S.A. también planteó oposición a las reclamaciones impetradas en su contra. Frente a los hechos en los que estas se fundan, adujo como cierto el que hace referencia a la edad de la demandante y su vinculación al RAIS en el año 2000; sobre los restantes supuestos fácticos negó su veracidad o no constarle. Presentó como excepciones de mérito las que nominó como falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción de la acción para solicitar la anulación del traslado, no se presentan los presupuestos legales y jurisprudencias para ser merecedora de un traslado al régimen solidario de prima media con prestación definida, buena fe, validez de la afiliación al RAIS, compensación y pago, obligación a cargo exclusivamente de un tercero y ausencia de vicios del consentimiento (doc.019 y 020, carp.01).

1.2 Decisión de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 10 de mayo del 2022 (docs.33 y 34, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, en la que resolvió declarar la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS, ordenando a AFP COLFONDOS S.A. a devolver a COLPENSIONES en un término de 30 días todos los valores que hubiere recibido por la afiliación de la demandante, incluyendo las cotizaciones completas, los bonos pensionales, cualquier suma adicional, frutos e intereses, sin que pueda retener los

gastos de administración, ni los aportes de solidaridad; y a COLPENSIONES, a recibir dichos conceptos y a tener a la actora como su afiliada, a la vez de autorizar a esta administradora a calcular la equivalencia de los dineros recibidos del RAIS, de forma que, el retorno de la demandante no genere perjuicio alguno.

Seguidamente resolvió negar la solicitud de pensión de vejez, ordenando a COLPENSIONES que una vez reciba los recursos, proceda a resolver la solicitud pensional, gravando en costas las co-demandadas (minuto 37:14 a 51:51, doc.33, carp.01).

1.3 Recurso de Apelación

La procuradora judicial de la señora ISABEL CRISTINA DE FÁTIMA GALLEGU SUÁREZ, inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación, con miras de que se revoque de manera parcial la decisión adoptada en la primera instancia, refutando la autorización otorgada a la demandada COLPENSIONES E.I.C.E. para elaborar un cálculo actuarial de equivalencia, pues tal acto se constituye en un obstáculo no solo para los efectos de materializar la ineficacia del traslado declarado, sino también, la cristalización del derecho a la pensión de vejez que solicita, al encontrarse diferencias entre semanas y capital ahorrado en uno y otro régimen pensional. Prosigue, insistiendo en la orden de traslado al RPMPD de los rendimientos financieros que se acrediten en la CAI adscrita al RAIS, y en particular que, si uno de los efectos de la ineficacia es precisamente la inexistencia del acto jurídico de traslado de régimen pensional, no existe justificación para que la AFP COLFONDOS S.A. conserve estos recursos.

Finalmente, presenta disenso frente a lo resuelto por el juzgador de instancia en lo atinente al no reconocimiento de la pensión por vejez y sus intereses de mora, aduciendo que a su criterio, los requisitos exigidos para acceder a la pensión de vejez se encuentran satisfechos, teniendo el derecho consolidado a la prestación económica desde el momento que cumplió los 57 años edad, y en esa medida, la jurisdicción está llamada a proteger su estabilidad y su derecho pensional (minuto 51:55 a 56:54, doc.33, carp.01).

En igual sentido y acudiendo en líneas generales a similares argumentos, la poderhabiente de la AFP COLFONDOS S.A. presentó y sustentó el recurso de apelación en punto al cálculo de equivalencia autorizado en la sentencia recurrida, resaltando que la administradora del RAIS trasladará el 100% de los saldos que se encuentren en la CAI de la afiliada, a excepción del bono pensional que no ha sido redimido; por lo que al no resultar saldo pendiente por entregar, no sería pertinente el cálculo actuarial de equivalencia que debe realizar la administradora del RPMPD (minuto 56:58 a 59:17, doc.33, carp.01).

COLPENSIONES E.I.C.E. se opone a la condena en costas que le fuera impuesta, indicando que actuó conforme a derecho, siendo diligente en resolver las solicitudes presentadas por la accionante, con independencia de que hayan sido resueltas de manera contraria a sus intereses. Así mismo asevera que, contrario a lo considerado por el *a quo*, no es atribuible a la administradora la mora en el reconocimiento de la pensión de vejez de la demandante, sino que por el contrario, el tiempo que demoró en resolver la controversia es producto de las decisiones que se han adoptado en el devenir procesal, máxime cuando no tuvo injerencia en el acto de traslado de régimen y por tanto el deber de información era una obligación que debía satisfacer el fondo del RAIS convocado (minuto 59:22 a 01:03:18, doc.33, carp.01).

1.4 Grado Jurisdiccional de Consulta

Teniendo en cuenta que la decisión adoptada en primera instancia, fue adversa a los intereses COLPENSIONES E.I.C.E., la sentencia será examinada bajo el grado jurisdiccional de consulta, en favor de la antedicha entidad, en los puntos en los que no fue objeto de alzada.

1.5 Trámite de Segunda Instancia

Los recursos de apelación y el grado jurisdiccional de consulta se admitieron el 24 de octubre de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 31 del mismo mes y año (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran los alegatos de conclusión por escrito, de considerarlo del caso.

La vocera judicial de COLPENSIONES E.I.C.E. (doc.08, carp.02), presentó las alegaciones pertinentes reiterando los argumentos expuestos en la sustentación del disenso, agregando en su argumentación la interpretación que del artículo 171 del entonces CCA desarrolla la Corte Constitucional, extendiéndola al artículo 365 del CGP, destacando a su vez que la jurisprudencia ha sido clara en disponer que los fondos del RAIS y no la administradora del RPMPD, son los llamados a asumir las consecuencias la ineficacia del traslado de régimen pensional, para así discutir la condena en costas.

Por su parte, la AFP COLFONDOS S.A. afirma que la orden de devolución de bonos pensionales y la autorización a COLPENSIONES E.I.C.E. de efectuar un cálculo actuarial de equivalencia deben ser revocados; la primera dada la imposibilidad de cumplirla por no estar redimido el bono pensional, y lo segundo, por cuanto además de no ser materia de discusión, en la sentencia SU 062 de 2010 se pregona que le corresponde al afiliado asumir la diferencia resultante entre el saldo de la CAI y el valor de los aportes en caso

de haber permanecido en el RPMPD en casos de traslado entre regímenes pensionales (doc.09, carp.02).

Finalmente, la parte actora en la sustentación de sus alegaciones refiere distintas decisiones proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para concluir que, de acuerdo con los lineamientos ofrecidos por esa Corporación, resulta procedente el traslado de los rendimientos que se hallen en la CAI del afiliado al RPMPD, dejando de lado su insistencia en lo que respecta al reconocimiento pensional (doc.11, carp.02).

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la demandante y las co-demandadas, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de la alzada, al igual que se estudiará integralmente la decisión en el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES E.I.C.E., para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a determinar en un primer nivel de análisis si la afiliación de la señora ISABEL CRISTINA DE FÁTIMA GALLEGO SUÁREZ al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por la AFP COLFONDOS S.A., deviene en ineficaz, efecto para el que habrá de establecerse si en la antesala al acto jurídico de traslado de régimen pensional, el fondo privado le garantizó a la potencial afiliada el derecho al consentimiento informado; en caso contrario, la Sala se ocupará de definir cuáles son los efectos jurídicos que devienen de la declaratoria de la ineficacia del traslado del RPMPD al RAIS. En segundo lugar, se resolverá si a la demandante le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de vejez, y en caso afirmativo, auscultará la procedencia de la causación y reconocimiento de los intereses moratorios y se identificará la entidad de seguridad social responsable en su reconocimiento y pago.

2.2. Sentido del Fallo

El sentido del fallo de esta Corporación será **confirmatorio**, frente a la declaratoria de la ineficacia del traslado, siguiendo la tesis de que no se brindó la asesoría cualificada y detallada que pregonaba el precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, **modificándolo** en cuanto a reconocer la integralidad de las consecuencias

jurídicas que conlleva la devolución de los rendimientos y todas las cotizaciones realizadas, esto es, que el traslado debe comprender, además de lo descontado por comisiones de administración, lo propio por aportes al fondo de garantía de pensión mínima y primas del seguro previsional, descuentos que deberá devolverse de manera indexada, **revocándolo** en cuanto al cálculo de equivalencia ordenado y de la negativa al reconocimiento de la pensión de vejez, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Sea lo primero señalar a manera de argumentos introductorios que, esta Corporación acoge el criterio jurisprudencial que antaño ha sostenido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras sentencias, en la SL del 09-09-2008, radicado 31989, SL del 22-11-2011, radicado 33083, SL-12136 del 03-09-2014, radicado 46292, SL 1688 del 2019, radicado 68838, y SL-1217 del 03-03-2021, radicado 85054, según el cual, la carga de la prueba se invierte en favor de los afiliados considerando que: (i) las negaciones indefinidas no pueden demostrarse materialmente por quien las invoca, (ii) la afiliada representa la parte débil de la relación jurídica contractual en virtud de la posición en el mercado, profesionalismo, y experticia que debe tener las administradoras de fondos de pensiones, y (iii) la demandante tiene menos posibilidades de esclarecer los hechos que se debaten, ya que las administradoras de fondos de pensiones son las que tienen el control de la operación; reglas jurisprudenciales que, en criterio del Alto Tribunal, resultan aplicables a todos los procesos en los que se discute la validez del traslado de régimen pensional, sin importar que el derecho esté consolidado, que la

afiliada sea beneficiaria o no del régimen de transición, o que esté próxima o no a pensionarse (SL-3202 del 14-07-2021 – Subrayas de la Sala).

Previo a dirimir la litis planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que la señora ISABEL CRISTINA DE FÁTIMA GALLEGU SUÁREZ nació el 25 de abril de 1960 (pág.42, doc.03, carp.01), que se afilió al seguro obligatorio administrado por el extinto Instituto de Seguros Sociales, entidad a la cual efectuó aportes entre el 30 de septiembre de 1980 y el 16 de octubre de 1992 (págs.43 a 54, doc.03, carp.01); que a partir del 11 de noviembre de 1992 y hasta el 15 de junio de 2000 efectuó aportes a la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL, por cuenta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (págs.43 a 54, doc.03, carp.01); y que en el mes de junio de 2000 solicitó traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad – RAIS, representado por la AFP COLFONDOS S.A. (págs.56 a 61, doc.03, carp.01)

Tampoco se discute que el 30 de agosto de 2017 presentó reclamación administrativa ante COLPENSIONES E.I.C.E., a fin de que se declarara la ineficacia de su traslado y le fuera reconocido el derecho pensional (pág.67, doc.03, carp.01).

En último término, se encuentra acreditado que la actora actualmente cuenta con 62 años de edad (pág.42, doc.03, carp.01), la densidad de semanas cotizadas requerida y \$319.462.780,00 acumulados en la cuenta de ahorro individual (doc.29, carp.01).

2.3.1 La ineficacia de la afiliación y la libertad de la selección de régimen

El Sistema General de Seguridad Social fue diseñado como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, para que la ciudadanía pueda gozar de una calidad de vida digna, mediante la cobertura integral de las contingencias que menoscaban la salud y la capacidad económica (preámbulo de la Ley 100 de 1993); de forma subsecuente, el Sistema General de Pensiones fue diseñado para garantizar el amparo ante las contingencias de vejez, invalidez y muerte, y en aras de dar cumplimiento al objetivo trazado por el legislador, se establecieron dentro de estos dos regímenes excluyentes pero coexistentes: el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Las administradoras de ambos regímenes ostentan la naturaleza de entidades previsionales (artículo 90 de la Ley 100 de 1993, artículo 4° del Decreto 656 de 1994), característica que les exige formación en la ética del servicio público, y las ubica el campo de la responsabilidad profesional.

La selección del régimen es libre y voluntaria, y para tal efecto, al momento de la vinculación o del traslado, la afiliada debe manifestar su elección por escrito (literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993), y frente al desconocimiento del derecho a la libertad de selección, proceden las sanciones de que trata el inciso 1° del artículo 271 ibídem,

esto es, la ineficacia de la afiliación y la imposición de una multa a cargo de la persona natural o jurídica que hubiere impedido o trasgredido de cualquier forma el derecho de selección de régimen pensional. Como colofón de ello, para que se perfeccione el cumplimiento de las obligaciones y derechos antes descritos, a las administradoras de fondos de pensiones se les impone un obrar acorde a la trascendencia de la labor que cumplen, obligaciones que emanan del principio de la buena fe y que se contraen a la transparencia, la vigilancia y el deber de información, dentro del ejercicio de un buen consejo, tal y como lo ha entendido el órgano jurisprudencial de cierre (CSJ SL del 09-09-2008, radicado 31989, SL del 22-11-2011, radicado 33083, SL-12136 del 03-09-2014, radicado 46292, SL-1688 del 2019, radicado 68838, y SL-1217 del 03-03-2021, radicado 85054).

La línea jurisprudencial antes descrita contempla el precedente judicial por seguir, y del que se desprende: (i) que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones es un deber ineludible desde su creación; (ii) que el formulario de afiliación es insuficiente para probar el cumplimiento de tal deber, requiriéndose la prueba del consentimiento informado; (iii) que la carga de la prueba le corresponde a las AFP, por virtud de su inversión a favor de la afiliada como parte débil de la relación procesal; (iv) que permanecer en un régimen pensional por largos años, o que se le haya re-asesorado, o que haya tenido insipientes comunicaciones con la AFP, o que hubiere realizado traslados entre las diferentes administradoras de pensiones del RAIS, no ratifica ni convalida el acto de afiliación y traslado viciado de ineficacia; (v) que el fenómeno extintivo de la prescripción no opera respecto de la pretensión de ineficacia de la afiliación, ya que la sentencia que declara la misma, en realidad lo que hace es constatar un estado de cosas surgido con anterioridad al inicio de la Litis; y (vi) que la administradora que indujo en error al afiliada para trasladarlo al RAIS, tiene la obligación de devolver al régimen de prima media el 100% de los aportes efectuados por la afiliada, asumiendo a su cargo los deterioros o menguas que estos hubieren sufrido (Subrayas de la Sala).

Ahora bien, conviene precisar que para la fecha en que la señora ISABEL CRISTINA DE FÁTIMA GALLEGO SUÁREZ se trasladó de régimen pensional el 23 de junio del 2000 (pág.1 y 2, doc.20, carp.01) la AFP COLFONDOS S.A., tenía la obligación de brindarle información detallada sobre los efectos del traslado, en los términos previstos en los artículos 13, literal b) y 271 de la Ley 100 de 1993, y en el artículo 97, numeral 1° del Decreto 663 de 1993, lo que en términos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia consiste en “... ilustrar a sus potenciales afiliadas, en forma clara, precisa y oportuna, de las características de cada uno de los dos regímenes pensionales, con el fin de que pudieran tomar decisiones informadas. (...) suministrar (...) una ilustración suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna sobre las implicaciones de abandonar el esquema de prima media con prestación definida y sus posibles

consecuencias futuras. (...) proporcionar (...) una ilustración acerca de las condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes, lo que incluye la existencia de una transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales” (SL-1217 del 03- 03-2021, radicado 85054 – Subraya de la Sala), de todo lo cual, lo único que se allegó fue el formulario de afiliación (pág.4, doc.20, carp.01), documental que no refleja de manera alguna que a la promotora del juicio se le hubiere prestado la asesoría cualificada exigida, y por contera, no es posible concluir que la AFP COLFONDOS S.A., hubiere cumplido con los mínimos de transparencia, claridad y completitud en la información que debía ser suministrada, ya que no basta explicar los beneficios de cada uno de los regímenes, sino también las consecuencias adversas del traslado de régimen, mismas que no fueron materia de análisis previo, o cuando menos, al momento de efectuarse la afiliación y traslado al régimen pensional.

En este punto, estima pertinente la Sala acotar que el hecho de que la AFP COLFONDOS S.A. no cuente con ningún soporte documental sobre la asesoría brindada a la afiliada, previo a efectuarse el traslado de régimen pensional, y afirme que la información solo le fue brindada de manera verbal, deja entrever una clara contravención de lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 692 de 1994, pues no basta con allegar un formato pre-impreso de vinculación cumpliendo con los requisitos formales que la Superintendencia Financiera de Colombia indica deben reunirse, sino que se requiere acreditar la efectiva asesoría integral brindada en la antesala del traslado de régimen, ilustrando al interesado sobre las características, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, con la observación de que para optar por la pensión anticipada antes de la edad mínima debían efectuarse aportes voluntarios superiores a las deducciones de ley por cotizaciones; que para causar la pensión de vejez se debe contar con una suma dineraria mínima en la cuenta de ahorro individual; que la existencia de eventuales beneficiarios por sobrevivencia incrementan dicha suma mínima requerida, entre otras particularidades, en razón a que la asesoría no solo debe estar encaminada a persuadir a la afiliada con llamativos rendimientos financieros o la posibilidad de acceder a la pensión sin importar la edad, sino que debe atender también a que la afiliada pueda lograr la prestación económica que mejor se acompañe con sus expectativas pensionales y densidad cotizacional.

De igual forma se observa que, aunque en el interrogatorio de parte rendido por la señora ISABEL CRISTINA DE FÁTIMA GALLEGO SUÁREZ (minuto 10:05 a 17:32, doc.33, carp.01), ésta admitió que había suscrito el formulario de afiliación a la AFP COLFONDOS S.A., no puede soslayar la Sala que el deber de información solo se satisface con la evidencia de que la decisión de la afiliada haya sido libre e informada, lo que no se logra acreditar por parte de la AFP COLFONDOS S.A., máxime si se tiene en cuenta que, por el contrario, la demandante manifestó que se afilió a esta AFP por ser la única opción disponible, por la urgencia de vincularse a la sociedad Visión Colombia y

con el ánimo de no perder semanas, siendo enfática en sostener que la promoción de los fondos privados e incluso la información que se brindaba en el país, eran claras en señalar que *“el seguro social se iba a acabar”*, recalcando que ni al momento de la afiliación ni de manera posterior le informaron las características del RAIS. También es del caso resaltar que la AFP COLFONDOS S.A., no desplegó actividad probatoria alguna enderezada a demostrar que el asesor que atendió a la accionante en el momento en el que se produjo el traslado de régimen pensional, cumpliera con su deber legal de suministrar información clara, completa y comprensible a la potencial afiliada, quebrantándose así lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 720 de 1994. A contrario sensu, la falta de soporte documental de que trata el artículo 38 del Decreto 692 de 1994, permite inferir que los traslados de régimen pensional no se ciñeron a los parámetros legales y jurisprudenciales, sin que resulten relevantes las manifestaciones genéricas realizadas por el extremo activo en desarrollo del interrogatorio de parte, y menos aún las referencias a que la afiliada no realizó indagaciones de su situación pensional por su cuenta, en tanto el deber de brindar tal información corresponde *ope legis* a la administradora de fondos de pensiones, y no al afiliado.

Finalmente, conviene ahincar que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que *“... la reacción del ordenamiento jurídico a la afiliación desinformada es la ineficacia, o la exclusión de todo efecto jurídico del acto de traslado. Por consiguiente, el examen del acto del cambio de régimen pensional, por transgresión del deber de información, debe abordarse desde la institución de la ineficacia en sentido estricto y no desde el régimen de las nulidades sustanciales, salvo en lo relativo a sus consecuencias prácticas (vuelta al status quo ante, art. 1746 CC). Lo anterior, debido a que en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, el legislador consagró de manera expresa que la violación del derecho a la afiliación libre del trabajador es la ineficacia”* (CSJ SL-1467 del 24-04-2021, radicado 85037).

Así las cosas, habrá de confirmarse la decisión de instancia en este aspecto, en tanto declaró la ineficacia de la afiliación y el consiguiente retorno al RPMPD sin solución de continuidad.

2.3.2 Los efectos de la ineficacia de la selección de régimen y traslado de cotizaciones

En lo que concierne a los efectos que devienen de la declaratoria de la ineficacia de la afiliación al RAIS, es menester indicar que tal devolución debe ceñirse a los términos previstos en el artículo 1746 del CC, en consonancia a lo pregonado por el máximo tribunal de esta jurisdicción (CSJ SL del 09-09-2008, radicado 31898, SL-4989 del 14-11-2018, radicado 47125, y SL-1429 del 09-04-2019, radicado 68202), a la vez de que COLPENSIONES E.I.C.E. tiene el deber de recibir las cotizaciones, sin que exista alguna

circunstancia impeditiva para ello, por el simple hecho de ser un tercero respecto del acto jurídico del que se declarará la ineficacia, por la potísima razón de que administra el RPMPD, al que se encontraba afiliada la señora ISABEL CRISTINA DE FÁTIMA GALLEGO SUÁREZ antes del traslado de régimen pensional. Importa recordar lo expuesto en la sentencia CSJ SL-2877 del 29-07-2020, radicado 78667, en la que, sobre los efectos de la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico como los aquí analizados, adoctrinó “... De modo que al no existir una norma explícita que regule los efectos de la ineficacia de un acto jurídico en la legislación civil, acudió al aludido precepto relativo a las consecuencias de la nulidad, el cual consagra las mismas consecuencias de aquella. [...] a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado”, y entretanto, al abordar el tema de las implicaciones y consecuencias jurídicas de la declaratoria de ineficacia de la afiliación al RAIS, el máximo tribunal de esta jurisdicción precisó:

“i) que ésta involucra la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual, en el sentido que debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida;

ii) que ello incluye el reintegro a Colpensiones, además de lo consignado en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos y los bonos pensionales, lo recaudado por gastos de administración y comisiones debidamente indexados durante todo el tiempo que la demandante permaneció en el RAIS, así como los valores utilizados en seguros previsionales y los emolumentos destinados a constituir el fondo de garantía de pensión mínima.

iii) que los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional, conlleva que todas las cotizaciones efectuadas por la promotora del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones”.

Así pues, la ineficacia del traslado conlleva precisamente a que el fondo privado de pensiones devuelva todas las cotizaciones que hubiere recibido, incluyendo lo correspondiente al porcentaje que por gastos o comisión de administración haya descontado de las cotizaciones, así como también lo descontado para cubrir los aportes al fondo de garantía de pensión mínima (artículo 7º del Decreto 3995 de 2008, Sentencia SU-062 de 2010) y los gastos de la aseguradora (primas previsionales), pues carecería

de sentido y objeto la declaratoria de ineficacia por la falta de la información exigida, de no trasladarse de manera íntegra las cotizaciones efectuadas, viéndose favorecida la AFP COLFONDOS S.A. sin razón financiera atendible, pues a pesar de que tales descuentos tuvieron un fundamento legal y sirvieron en su momento a un propósito previamente establecido como lo es el aseguramiento de los riesgos de invalidez y muerte, la administración financiera de las cotizaciones o el fortalecimiento financiero de un fondo de garantía, aquellos nunca se hubieran deducido, de no haberse efectuado la afiliación y traslado de régimen pensional.

En aditamento a lo anterior, esta Sala considera que hay lugar al traslado de la totalidad de las sumas que la AFP COLFONDOS S.A. hubiere recibido con ocasión de la afiliación de la señora ISABEL CRISTINA DE FÁTIMA GALLEGU SUÁREZ, a propósito de que engrosen el fondo común de naturaleza pública administrado por COLPENSIONES E.I.C.E., en virtud de las previsiones contenidas en el artículo 32 de la Ley 100 de 1993, de modo que, se garantice no solo la sostenibilidad financiera del sistema, sino también la plena realización del principio de solidaridad de que trata el artículo 2 ibídem; por demás, no hay lugar a reconocer restituciones mutuas, pues como se predica en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia antes referenciada (SL-2877 del 29-07-2020, radicado 78667), se deben devolver todos los rubros descontados de las cotizaciones, y si bien no pasa por alto esta Sala la existencia de un pronunciamiento de la Superintendencia Financiera en contrario, es preciso indicar que el mismo se refiere a los traslados a instancia de la afiliada y no como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, y que en últimas, tal acto no es de obligatorio acatamiento para los operadores judiciales, allende que, la Sala se aviene es a la línea jurisprudencial que en derredor del tema ha venido desarrollando la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como quedó dicho *in extenso* en líneas anteriores.

En lo que concierne a la indexación de las partidas descontadas de la cotización y sujetas a traslado, cumple señalar que aunque la actualización monetaria no fue objeto de impetración con la demanda, ni fue materia de excepción de fondo por parte de COLPENSIONES E.I.C.E., vale decir, materia de debate en el presente proceso, debe procederse a su reconocimiento de manera oficiosa, en tanto en cuanto, la misma no corresponde a una condena adicional, sino que comporta el mero reconocimiento de los efectos de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda de las sumas descontadas de las cotizaciones por concepto de cuotas de administración, primas del seguro previsional, y aportes para el fondo de garantía de pensión mínima, prohijándose el criterio jurisprudencial expuesto en la reciente Sentencia SL950-2022 del 02/03/2022, emitida por la H. Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Laboral, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Sobre este particular, conviene apuntalar que la actualización monetaria debe ordenarse, se itera, incluso de manera oficiosa, siguiendo el criterio sentado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la Sentencia SL-950-2022 atrás citada, en la que remembra: “... *la Sala ha adoctrinado que tal declaratoria obliga a las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones -debidamente indexados- con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones [...]. De igual modo, la AFP deberá devolver a Colpensiones el porcentaje correspondiente a los gastos de administración y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y con cargo en sus propios recursos*”.

Ahora, de cara al cálculo actuarial que el *a quo* autorizó a COLPENSIONES, ha de relieves la Sala que tal tesis no es consistente con el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala, pues en estos casos, el criterio vertido por el máximo órgano no ha tenido variación, además de que no es posible impartir ese tipo de condenas como lo hizo el *a quo*, cuando de conformidad con el artículo 12 de la Ley 100 de 1993 los dos regímenes de pensiones si bien coexisten son excluyentes, y por tanto, no es procedente realizar cálculo actuarial alguno, una vez surtida la ineficacia del traslado, habida cuenta que la AFP deberá devolver a COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales que se hallen redimidos, pagos de seguro previsional, gastos de administración, descuentos al rubro de garantía de pensión mínima, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos financieros que se hubieren causado (SL33083-2011, SL4989-2018 y SL1429-2019), y en esa medida, habrá de revocarse la sentencia de primera instancia en este ítem.

En síntesis, la Sala modificará el ordinal tercero la sentencia de primer grado, para ordenar el traslado de las cotizaciones, bonos pensionales que se hallen redimido, los rendimientos financieros, pagos de seguro previsional, las comisiones de administración, las primas del seguro previsional, y los aportes para el fondo de garantía de pensión mínima, junto con la indexación de los rubros descontados de la cotización, en la medida de que no fueron objeto de ninguna capitalización, y habrá de revocarse parcialmente el ordinal cuarto en lo relativo a la autorización otorgada a COLPENSIONES para efectuar el cálculo actuarial de equivalencia, por lo antes expuesto.

2.3.3 Pensión de vejez

De cara a la pretensión de reconocimiento de la pensión de vejez, baste con traer a colación lo adoctrinado por el órgano jurisdiccional de cierre, el cual estimó que, declarar

la ineficacia del traslado “... *implica privar de todo efecto práctico al traslado, bajo la ficción jurídica de que aquella nunca se trasladó al RAIS o, más bien, siempre estuvo afiliada al régimen de prima media con prestación definida*” (CSJ SL-1688 del 2019, radicado 68838).

Resuelto como está, que la demandante debe entenderse afiliada al RPMPD sin solución de continuidad, importa señalar que la accionante no es beneficiaria del régimen de transición pensional, pues no acreditó los requisitos mínimos exigidos al 1º de abril de 1994, esto es, no contaba con 35 años cumplidos (pág.42, doc.03, carp.01), ni con 15 años de servicios cotizados a tal data (págs.1 a 4, doc.15, carp.01).

2.3.3.1 De la causación de la pensión de vejez: Ahora, atendiendo a las previsiones de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, se concluye que la accionante satisface los requisitos mínimos para acceder a la pensión de vejez, dado que acreditó los 57 años de edad el 25 de abril de 2017 (pág.42, doc.03, carp.01) y cuenta con un total de 1.802,57 semanas cotizadas (págs.1 a 4, doc.15, págs.45 a 61, doc.03, y doc.029, carp.01).

2.3.3.2 Del disfrute de la pensión de vejez: Ahora, para disfrutar de la pensión de vejez, además de la acreditación de los requisitos de edad y tiempo de cotización, es necesario que se produzca la desafiliación al Sistema General de Pensiones (artículos 13 y 36 del Decreto 758 de 1990), formalidad que no puede deducirse de la simple cesación en el pago de los aportes, más aún si, al margen de que un trabajador consolide el derecho a la pensión de vejez en determinado momento, mantiene la posibilidad de seguir afiliado y continuar cotizando, evento en el cual esos aportes adicionales tendrán como propósito incrementar el monto pensional (CSJ SL-15091 del 09-09-2015, Radicado 41016).

En consonancia con ello, si bien la regla general sigue siendo la desafiliación del sistema como requisito necesario para el disfrute de la pensión, existen situaciones especiales que también ameritan ser ponderadas, tales como, **i.** el cumplimiento de la edad mínima; **ii.** la acreditación de la densidad de semanas de cotización exigidas; **iii.** la cesación en las cotizaciones, y; **iv.** la radicación de la solicitud para el reconocimiento prestacional.

En orden a desatar este aspecto de la controversia, la Sala avizora que la señora ISABEL CRISTINA DE FÁTIMA GALLEGU SUÁREZ causó el derecho para el reconocimiento de la pensión de vejez cuando cumplió los 57 años de edad el 25 de abril de 2017, dada la considerable densidad de semanas que acredita, como se explicó en las líneas que anteceden, y efectúo aportes al sistema general de pensiones hasta el mes de febrero de 2021 (doc.029, carp.01), y aunque no obre novedad de retiro al SGSSI en la historia laboral allegada por la AFP COLFONDOS S.A., lo cierto es que el presupuesto factual antes descrito permite colegir, sin hesitación alguna, que a la litigiosa por activa le asiste

el derecho de disfrutar de la pensión de vejez desde el 01 de marzo de 2021, esto es, desde el día siguiente al de la última cotización, y al consiguiente pago de las mesadas causadas desde ese entonces.

2.3.3.3 De la liquidación de la pensión de vejez: La pensión de vejez se liquida con base en el promedio de los salarios que sirvieron como base de cotización durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, o el de toda la vida, según resulte más favorable (artículo 21 de la Ley 100 de 1993), suma a la que debe aplicársele como tasa de reemplazo un monto que oscila entre el 55% y 65% del ingreso base de liquidación del afiliado, en forma decreciente, en función de su nivel de ingresos, y el cual se obtiene luego de despejar la fórmula “ $r=65.50-0.50s$ ”, donde “ r ” es el porcentaje del ingreso de liquidación, y “ s ” es el número de salarios mínimos legales mensuales vigentes, y que se incrementa en 1.5%, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, sin que el valor total de la pensión pueda ser superior al 80% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima legal (artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003).

Para calcular el ingreso base de liquidación, la Sala promedió los salarios que sirvieron de base de cotización durante toda la vida laboral, por valor de \$ 4.525.280,03, y durante los últimos 10 años, por valor de \$ 7.516.401,61, según la tabla de liquidación con la que se glosa esta providencia. A la par, para obtener la tasa de remplazo, este juzgador plural dividió el IBL más favorable, por el valor del salario mínimo legal mensual vigente para la fecha del reconocimiento de la prestación ($\$7.516.401,61/\$908.526=8,27$), cuyo resultado fue multiplicado por el factor 0,5 ($8,27*0,5=4,135$), y luego restado del factor 65,50 ($65,50-4,135=61,36\%$), monto al que se adicionaron 15 puntos, por las 502,57 semanas adicionales a las 1.300 mínimas para el año 2021 ($1.802,57-1.300=502,57=500$; $500/50=10$; $10*1,5=15$), para una tasa de reemplazo del **76.36%** ($61.36\%+15\%=76,36\%$).

De suerte que, la primera mesada por reconocer a favor de la señora ISABEL CRISTINA DE FÁTIMA GALLEGO SUÁREZ es de **\$5.739.780** ($\$7.516.401,61*76,36\%=\$5.739.780$); así las cosas, COLPENSIONES E.I.C.E. deberá reconocer y pagarle a la señora ISABEL CRISTINA DE FÁTIMA GALLEGO SUÁREZ, la suma de **\$148.799.303**, por concepto de retroactivo pensional causado entre el 01 de marzo de 2021 y el 31 de enero de 2023, cuyo cuadro de liquidación se aneja a esta providencia, incluyendo únicamente la mesada adicional de diciembre de cada anualidad, habida cuenta que el derecho al reconocimiento de la prestación se determinó con el cumplimiento de la edad mínima en el año 2017, esto es, con posterioridad al 31 de julio de 2011 (parágrafo transitorio 6º del Acto Legislativo 01 de 2005). En el mismo sentido, se denota que sobre las mesadas antes descritas no ha operado el fenómeno extintivo de la prescripción, toda vez que, entre la fecha de su causación, 25 de abril de

2017, y la fecha de radicación de la presente acción, 04 de diciembre de 2017 (pág.12, doc.02, carp.01), no transcurrió el término trienal de que tratan los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.

Adicionalmente, y de conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los aportes para el Sistema General de Salud se liquidan con base en el total de los ingresos que el afiliado hubiere recibido durante el periodo reportado, normativa con base en la cual COLPENSIONES E.I.C.E. está autorizada para descontar del retroactivo pensional adeudado, el monto correspondiente para sufragar los aportes para el sub-sistema General de Salud.

2.3.3.4 Intereses moratorios e indexación: Adicionalmente, frente a la pretensión de pago de intereses de mora, tenemos que éstos se generan en razón a que el retardo en el reconocimiento y pago de derechos pensionales tienen su fuente legal en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y en lo atinente a la pensión de vejez, ha delineado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en fallo del 16 de octubre de 2012 (rad. 42.826), que: *“se causan a partir del plazo máximo de 4 meses a que se refiere el artículo 9° de la ley 797 de 2003, esto es, desde el momento en que, vencido el término de gracia que tienen los fondos de pensiones para resolver la solicitud de pensión y proceder a su pago, no lo hacen”,* y que *“de forma excepcionalísima y particular, esta Corporación ha estimado que la imposición de los intereses moratorios no opera cuando la decisión de negar la pensión tiene un respaldo normativo o porque proviene de la aplicación minuciosa de ley”* (SL787-2013).

En el *sub studium*, la falta de reconocimiento de la pensión de vejez por parte de COLPENSIONES tiene fundamento en una aplicación minuciosa de la ley, a saber, que la demandante se encontraba válidamente afiliada al RAIS, situación que apenas se vendrá a modificar con la ejecutoria de la presente providencia, por manera que debe absolverse a la entidad pública demandada por este concepto, de conformidad con el precedente judicial en cita.

En subsidio, y habida cuenta que la suma reconocida por concepto de retroactivo pensional se verá afectada por la devaluación de la moneda, a causa de existir una economía notoriamente inflacionaria, lo procedente es ordenar la indexación de las sumas adeudadas, por tratarse de obligaciones propias del sistema de seguridad social que tienen un notorio carácter alimentario (CSJ SL- 11818 del 08-08-1999, reiterada, entre otras, en la SL-54806 del 06- 03-2013).

3. COSTAS

Sin costas para los recurrentes ante la prosperidad de los recursos impetrados, aclarando que para el caso de COLPENSIONES, si bien interpuso el recurso de apelación, lo cierto es que la sentencia se analizó integralmente en su favor en virtud al grado jurisdiccional de consulta. De las infligidas en primera instancia, habrán de revocarse las impuestas contra COLPENSIONES, en razón a que dicha entidad no tuvo injerencia alguna en el acto jurídico declarado ineficaz, y si se profieren órdenes en su contra, no se debe a sus acciones u omisiones sino a las consecuencias jurídicas que devienen de la declaratoria de ineficacia. Las de primera instancia impuestas contra la AFP COLFONDOS S.A. se confirman.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal TERCERO de la sentencia materia de apelación y consulta proferida el 10 de mayo de 2022 por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, el cual quedará en los siguientes términos:

*“**TERCERO: CONDENAR** a COLFONDOS S.A. a devolver o trasladar a COLPENSIONES todos los valores, recursos o sumas que hubiere recibido con motivo de afiliación y traslado de la actora que obrare en su cuenta de ahorro individual, así como los descuentos efectuados sobre las cotizaciones por concepto de gastos de la aseguradora (primas previsionales), gastos o comisión de administración, y descuentos por aportes al fondo de garantía de pensión mínima, partidas que deberá devolver de manera indexada, con todos sus frutos e intereses como lo dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con todos los rendimientos que se hubieren causado, según lo expuesto en la parte motiva de este fallo. Para el cumplimiento de esta obligación se concede un término de treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de ésta providencia”*

SEGUNDO: REVOCAR parcialmente el ordinal CUARTO en cuanto autorizó a COLPENSIONES a realizar un cálculo actuarial de equivalencia de las cotizaciones, el cual quedará en los siguientes términos:

*“**CUARTO: Se ORDENA** a COLPENSIONES, a reactivar la afiliación de la demandante y recibir todo el capital y rubros que sean trasladados por COLFONDOS S.A.”*

TERCERO: REVOCAR el ordinal QUINTO, para en su lugar, **DECLARAR** que ISABEL CRISTINA DE FÁTIMA GALLEGU SUÁREZ causó el derecho a la pensión de vejez en el RPMPD, y **CONDENAR** a COLPENSIONES a reconocer y pagarle la pensión de vejez que consagra la Ley 797 de 2003, prestación que se pagará a partir del 1° de marzo de 2021, fecha de su disfrute, en cuantía inicial de \$ 5.739.780 y en razón de 13 mesadas al año, y cuyo retroactivo pensional liquidado hasta el 31 de enero de 2023, asciende al valor de \$148.799.303, incluidas las mesadas adicionales de diciembre de cada anualidad, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

Parágrafo 1º: El retroactivo pensional al que hubiere lugar, deberá ser pagado debidamente indexado, teniendo en cuenta la fecha de causación de cada mesada pensional y la fecha del efectivo pago.

Parágrafo 2º: AUTORIZAR a COLPENSIONES para que descuente del retroactivo pensional a que hubiere lugar, las cotizaciones que por mandato legal deben hacerse con destino al sistema de seguridad social en salud.

CUARTO: REVOCAR el ordinal NOVENO, para en su lugar, no imponer costas en contra de COLPENSIONES E.I.C.E., de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.


QUINTO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto de alzada.

SEXTO: SIN COSTAS en esta instancia.

Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, acogándose el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.


Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



CALCULO IBL DIEZ ÚLTIMOS AÑOS
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL

DESDE	HASTA	IBC O SALARIO	No. DIAS	SALARIO INDEXADO	PROMEDIO	AÑO FINAL	INDICE IPC FINAL	AÑO INICIAL	INDICE IPC INICIAL
1-feb-10	28-feb-10	\$ 4.115.000,00	30	\$ 7.284.304	\$ 60.703	2022	126,03	2009	71,20
1-mar-10	31-mar-10	\$ 4.115.000,00	30	\$ 7.284.304	\$ 60.703	2022	126,03	2009	71,20
1-abr-10	30-abr-10	\$ 4.115.000,00	30	\$ 7.284.304	\$ 60.703	2022	126,03	2009	71,20
1-may-10	31-may-10	\$ 4.115.000,00	30	\$ 7.284.304	\$ 60.703	2022	126,03	2009	71,20
1-jun-10	30-jun-10	\$ 4.115.000,00	30	\$ 7.284.304	\$ 60.703	2022	126,03	2009	71,20
1-jul-10	31-jul-10	\$ 4.115.000,00	30	\$ 7.284.304	\$ 60.703	2022	126,03	2009	71,20
1-ago-10	31-ago-10	\$ 4.115.000,00	30	\$ 7.284.304	\$ 60.703	2022	126,03	2009	71,20
1-sep-10	30-sep-10	\$ 4.115.000,00	30	\$ 7.284.304	\$ 60.703	2022	126,03	2009	71,20
1-oct-10	31-oct-10	\$ 4.115.000,00	30	\$ 7.284.304	\$ 60.703	2022	126,03	2009	71,20
1-nov-10	30-nov-10	\$ 4.115.000,00	30	\$ 7.284.304	\$ 60.703	2022	126,03	2009	71,20
1-dic-10	31-dic-10	\$ 6.995.000,00	30	\$ 12.382.432	\$ 103.187	2022	126,03	2009	71,20
1-ene-11	31-ene-11	\$ 4.214.000,00	30	\$ 7.230.264	\$ 60.252	2022	126,03	2010	73,45
1-feb-11	28-feb-11	\$ 4.346.000,00	30	\$ 7.456.746	\$ 62.140	2022	126,03	2010	73,45
1-mar-11	31-mar-11	\$ 4.280.000,00	30	\$ 7.343.505	\$ 61.196	2022	126,03	2010	73,45
1-abr-11	30-abr-11	\$ 4.280.000,00	30	\$ 7.343.505	\$ 61.196	2022	126,03	2010	73,45
1-may-11	31-may-11	\$ 4.280.000,00	30	\$ 7.343.505	\$ 61.196	2022	126,03	2010	73,45
1-jun-11	30-jun-11	\$ 4.280.000,00	30	\$ 7.343.505	\$ 61.196	2022	126,03	2010	73,45
1-jul-11	31-jul-11	\$ 4.280.000,00	30	\$ 7.343.505	\$ 61.196	2022	126,03	2010	73,45
1-ago-11	31-ago-11	\$ 4.280.000,00	30	\$ 7.343.505	\$ 61.196	2022	126,03	2010	73,45
1-sep-11	30-sep-11	\$ 4.280.000,00	30	\$ 7.343.505	\$ 61.196	2022	126,03	2010	73,45
1-oct-11	31-oct-11	\$ 4.280.000,00	30	\$ 7.343.505	\$ 61.196	2022	126,03	2010	73,45
1-nov-11	30-nov-11	\$ 4.280.000,00	30	\$ 7.343.505	\$ 61.196	2022	126,03	2010	73,45
1-dic-11	31-dic-11	\$ 7.276.000,00	30	\$ 12.483.959	\$ 104.033	2022	126,03	2010	73,45
1-ene-12	31-ene-12	\$ 4.280.000,00	30	\$ 7.079.621	\$ 58.997	2022	126,03	2011	76,19
1-feb-12	29-feb-12	\$ 4.280.000,00	30	\$ 7.079.621	\$ 58.997	2022	126,03	2011	76,19
1-mar-12	31-mar-12	\$ 4.280.000,00	30	\$ 7.079.621	\$ 58.997	2022	126,03	2011	76,19
1-abr-12	30-abr-12	\$ 4.280.000,00	30	\$ 7.079.621	\$ 58.997	2022	126,03	2011	76,19
1-may-12	31-may-12	\$ 4.280.000,00	30	\$ 7.079.621	\$ 58.997	2022	126,03	2011	76,19
1-jun-12	30-jun-12	\$ 4.280.000,00	30	\$ 7.079.621	\$ 58.997	2022	126,03	2011	76,19
1-jul-12	31-jul-12	\$ 4.280.000,00	30	\$ 7.079.621	\$ 58.997	2022	126,03	2011	76,19
1-ago-12	31-ago-12	\$ 4.280.000,00	30	\$ 7.079.621	\$ 58.997	2022	126,03	2011	76,19
1-sep-12	30-sep-12	\$ 4.280.000,00	30	\$ 7.079.621	\$ 58.997	2022	126,03	2011	76,19
1-oct-12	31-oct-12	\$ 4.280.000,00	30	\$ 7.079.621	\$ 58.997	2022	126,03	2011	76,19
1-nov-12	30-nov-12	\$ 4.280.000,00	30	\$ 7.079.621	\$ 58.997	2022	126,03	2011	76,19
1-dic-12	31-dic-12	\$ 7.276.000,00	30	\$ 12.035.355	\$ 100.295	2022	126,03	2011	76,19
1-ene-13	31-ene-13	\$ 5.878.125,00	30	\$ 9.491.945	\$ 79.100	2022	126,03	2012	78,05
1-feb-13	28-feb-13	\$ 4.280.000,00	30	\$ 6.911.307	\$ 57.594	2022	126,03	2012	78,05
1-mar-13	31-mar-13	\$ 4.280.000,00	30	\$ 6.911.307	\$ 57.594	2022	126,03	2012	78,05
1-abr-13	30-abr-13	\$ 4.965.000,00	30	\$ 8.017.439	\$ 66.812	2022	126,03	2012	78,05
1-may-13	31-may-13	\$ 4.451.000,00	30	\$ 7.187.436	\$ 59.895	2022	126,03	2012	78,05
1-jun-13	30-jun-13	\$ 4.451.000,00	30	\$ 7.187.436	\$ 59.895	2022	126,03	2012	78,05
1-jul-13	31-jul-13	\$ 4.451.000,00	30	\$ 7.187.436	\$ 59.895	2022	126,03	2012	78,05
1-ago-13	31-ago-13	\$ 4.451.000,00	30	\$ 7.187.436	\$ 59.895	2022	126,03	2012	78,05
1-sep-13	30-sep-13	\$ 4.451.000,00	30	\$ 7.187.436	\$ 59.895	2022	126,03	2012	78,05
1-oct-13	31-oct-13	\$ 4.451.000,00	30	\$ 7.187.436	\$ 59.895	2022	126,03	2012	78,05
1-nov-13	30-nov-13	\$ 4.451.000,00	30	\$ 7.187.436	\$ 59.895	2022	126,03	2012	78,05
1-dic-13	31-dic-13	\$ 7.715.413,00	30	\$ 12.458.782	\$ 103.823	2022	126,03	2012	78,05
1-ene-14	31-ene-14	\$ 4.451.000,00	30	\$ 7.050.804	\$ 58.757	2022	126,03	2013	79,56
1-feb-14	28-feb-14	\$ 4.451.000,00	30	\$ 7.050.804	\$ 58.757	2022	126,03	2013	79,56
1-mar-14	31-mar-14	\$ 4.451.000,00	30	\$ 7.050.804	\$ 58.757	2022	126,03	2013	79,56
1-abr-14	30-abr-14	\$ 4.451.000,00	30	\$ 7.050.804	\$ 58.757	2022	126,03	2013	79,56
1-may-14	31-may-14	\$ 4.451.000,00	30	\$ 7.050.804	\$ 58.757	2022	126,03	2013	79,56
1-jun-14	30-jun-14	\$ 4.451.000,00	30	\$ 7.050.804	\$ 58.757	2022	126,03	2013	79,56
1-jul-14	31-jul-14	\$ 4.451.000,00	30	\$ 7.050.804	\$ 58.757	2022	126,03	2013	79,56
1-ago-14	31-ago-14	\$ 4.451.000,00	30	\$ 7.050.804	\$ 58.757	2022	126,03	2013	79,56
1-sep-14	30-sep-14	\$ 4.451.000,00	30	\$ 7.050.804	\$ 58.757	2022	126,03	2013	79,56
1-oct-14	31-oct-14	\$ 4.451.000,00	30	\$ 7.050.804	\$ 58.757	2022	126,03	2013	79,56
1-nov-14	30-nov-14	\$ 4.451.000,00	30	\$ 7.050.804	\$ 58.757	2022	126,03	2013	79,56
1-dic-14	31-dic-14	\$ 7.715.000,00	30	\$ 12.221.289	\$ 101.844	2022	126,03	2013	79,56
1-ene-15	31-ene-15	\$ 4.451.000,00	30	\$ 6.802.009	\$ 56.683	2022	126,03	2014	82,47
1-feb-15	28-feb-15	\$ 4.451.000,00	30	\$ 6.802.009	\$ 56.683	2022	126,03	2014	82,47
1-mar-15	31-mar-15	\$ 4.451.000,00	30	\$ 6.802.009	\$ 56.683	2022	126,03	2014	82,47
1-abr-15	30-abr-15	\$ 4.451.000,00	30	\$ 6.802.009	\$ 56.683	2022	126,03	2014	82,47
1-may-15	31-may-15	\$ 5.800.375,00	30	\$ 8.864.121	\$ 73.868	2022	126,03	2014	82,47
1-jun-15	30-jun-15	\$ 5.810.375,00	30	\$ 8.879.403	\$ 73.995	2022	126,03	2014	82,47
1-jul-15	31-jul-15	\$ 5.810.375,00	30	\$ 8.879.403	\$ 73.995	2022	126,03	2014	82,47
1-ago-15	31-ago-15	\$ 5.829.125,00	30	\$ 8.908.056	\$ 74.234	2022	126,03	2014	82,47
1-sep-15	30-sep-15	\$ 5.821.625,00	30	\$ 8.896.595	\$ 74.138	2022	126,03	2014	82,47
1-oct-15	31-oct-15	\$ 5.824.125,00	30	\$ 8.900.415	\$ 74.170	2022	126,03	2014	82,47
1-nov-15	30-nov-15	\$ 5.792.875,00	30	\$ 8.852.659	\$ 73.772	2022	126,03	2014	82,47
1-dic-15	31-dic-15	\$ 9.106.875,00	30	\$ 13.917.107	\$ 115.976	2022	126,03	2014	82,47
1-ene-16	31-ene-16	\$ 5.836.000,00	30	\$ 8.353.132	\$ 69.609	2022	126,03	2015	88,05

CALCULO IBL DIEZ ÚLTIMOS AÑOS
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL

DESDE	HASTA	IBC O SALARIO	No. DIAS	SALARIO INDEXADO	PROMEDIO	AÑO FINAL	INDICE IPC FINAL	AÑO INICIAL	INDICE IPC INICIAL
1-feb-16	29-feb-16	\$ 4.987.000,00	30	\$ 7.137.949	\$ 59.483	2022	126,03	2015	88,05
1-mar-16	31-mar-16	\$ 4.719.000,00	30	\$ 6.754.357	\$ 56.286	2022	126,03	2015	88,05
1-abr-16	30-abr-16	\$ 4.719.000,00	30	\$ 6.754.357	\$ 56.286	2022	126,03	2015	88,05
1-may-16	31-may-16	\$ 4.719.000,00	30	\$ 6.754.357	\$ 56.286	2022	126,03	2015	88,05
1-jun-16	30-jun-16	\$ 4.719.000,00	30	\$ 6.754.357	\$ 56.286	2022	126,03	2015	88,05
1-jul-16	31-jul-16	\$ 4.719.000,00	30	\$ 6.754.357	\$ 56.286	2022	126,03	2015	88,05
1-ago-16	31-ago-16	\$ 4.719.000,00	30	\$ 6.754.357	\$ 56.286	2022	126,03	2015	88,05
1-sep-16	30-sep-16	\$ 4.719.000,00	30	\$ 6.754.357	\$ 56.286	2022	126,03	2015	88,05
1-oct-16	31-oct-16	\$ 4.719.000,00	30	\$ 6.754.357	\$ 56.286	2022	126,03	2015	88,05
1-nov-16	30-nov-16	\$ 4.719.000,00	30	\$ 6.754.357	\$ 56.286	2022	126,03	2015	88,05
1-dic-16	31-dic-16	\$ 8.180.000,00	30	\$ 11.708.125	\$ 97.568	2022	126,03	2015	88,05
1-ene-17	31-ene-17	\$ 4.719.000,00	30	\$ 6.387.256	\$ 53.227	2022	126,03	2016	93,11
1-feb-17	28-feb-17	\$ 4.719.000,00	30	\$ 6.387.256	\$ 53.227	2022	126,03	2016	93,11
1-mar-17	31-mar-17	\$ 5.571.000,00	30	\$ 7.540.454	\$ 62.837	2022	126,03	2016	93,11
1-abr-17	30-abr-17	\$ 5.003.000,00	30	\$ 6.771.655	\$ 56.430	2022	126,03	2016	93,11
1-may-17	31-may-17	\$ 5.003.000,00	30	\$ 6.771.655	\$ 56.430	2022	126,03	2016	93,11
1-jun-17	30-jun-17	\$ 5.003.000,00	30	\$ 6.771.655	\$ 56.430	2022	126,03	2016	93,11
1-jul-17	31-jul-17	\$ 5.003.001,00	30	\$ 6.771.656	\$ 56.430	2022	126,03	2016	93,11
1-ago-17	31-ago-17	\$ 6.003.001,00	30	\$ 8.125.175	\$ 67.710	2022	126,03	2016	93,11
1-sep-17	30-sep-17	\$ 5.003.001,00	30	\$ 6.771.656	\$ 56.430	2022	126,03	2016	93,11
1-oct-17	31-oct-17	\$ 5.003.000,00	30	\$ 6.771.655	\$ 56.430	2022	126,03	2016	93,11
1-nov-17	30-nov-17	\$ 5.003.000,00	30	\$ 6.771.655	\$ 56.430	2022	126,03	2016	93,11
1-dic-17	31-dic-17	\$ 8.505.100,00	30	\$ 11.511.813	\$ 95.932	2022	126,03	2016	93,11
1-ene-18	31-ene-18	\$ 3.668.000,00	30	\$ 4.769.692	\$ 39.747	2022	126,03	2017	96,92
1-feb-18	28-feb-18	\$ 0,00	0	\$ 0	\$ 0	2022	126,03	2017	96,92
1-mar-18	31-mar-18	\$ 0,00	0	\$ 0	\$ 0	2022	126,03	2017	96,92
1-abr-18	30-abr-18	\$ 0,00	0	\$ 0	\$ 0	2022	126,03	2017	96,92
1-may-18	31-may-18	\$ 0,00	0	\$ 0	\$ 0	2022	126,03	2017	96,92
1-jun-18	30-jun-18	\$ 781.242,00	30	\$ 1.015.890	\$ 8.466	2022	126,03	2017	96,92
1-jul-18	31-jul-18	\$ 0,00	0	\$ 0	\$ 0	2022	126,03	2017	96,92
1-ago-18	31-ago-18	\$ 0,00	0	\$ 0	\$ 0	2022	126,03	2017	96,92
1-sep-18	30-sep-18	\$ 0,00	0	\$ 0	\$ 0	2022	126,03	2017	96,92
1-oct-18	31-oct-18	\$ 0,00	0	\$ 0	\$ 0	2022	126,03	2017	96,92
1-nov-18	30-nov-18	\$ 0,00	0	\$ 0	\$ 0	2022	126,03	2017	96,92
1-dic-18	31-dic-18	\$ 0,00	0	\$ 0	\$ 0	2022	126,03	2017	96,92
1-ene-19	31-ene-19	\$ 0,00	0	\$ 0	\$ 0	2022	126,03	2018	100,00
1-feb-19	28-feb-19	\$ 0,00	0	\$ 0	\$ 0	2022	126,03	2018	100,00
1-mar-19	31-mar-19	\$ 5.003.000,00	30	\$ 6.305.281	\$ 52.544	2022	126,03	2018	100,00
1-abr-19	30-abr-19	\$ 5.003.000,00	30	\$ 6.305.281	\$ 52.544	2022	126,03	2018	100,00
1-may-19	31-may-19	\$ 5.831.116,00	30	\$ 7.348.955	\$ 61.241	2022	126,03	2018	100,00
1-jun-19	30-jun-19	\$ 5.831.116,00	30	\$ 7.348.955	\$ 61.241	2022	126,03	2018	100,00
1-jul-19	31-jul-19	\$ 5.831.116,00	30	\$ 7.348.955	\$ 61.241	2022	126,03	2018	100,00
1-ago-19	31-ago-19	\$ 5.831.116,00	30	\$ 7.348.955	\$ 61.241	2022	126,03	2018	100,00
1-sep-19	30-sep-19	\$ 5.831.116,00	30	\$ 7.348.955	\$ 61.241	2022	126,03	2018	100,00
1-oct-19	31-oct-19	\$ 5.728.116,00	30	\$ 7.219.145	\$ 60.160	2022	126,03	2018	100,00
1-nov-19	30-nov-19	\$ 5.831.116,00	30	\$ 7.348.955	\$ 61.241	2022	126,03	2018	100,00
1-dic-19	31-dic-19	\$ 5.831.116,00	30	\$ 7.348.955	\$ 61.241	2022	126,03	2018	100,00
1-ene-20	31-ene-20	\$ 877.803,00	30	\$ 1.065.795	\$ 8.882	2022	126,03	2019	103,80
1-feb-20	29-feb-20	\$ 1.000.000,00	30	\$ 1.214.162	\$ 10.118	2022	126,03	2019	103,80
1-mar-20	31-mar-20	\$ 1.000.000,00	30	\$ 1.214.162	\$ 10.118	2022	126,03	2019	103,80
1-abr-20	30-abr-20	\$ 0,00	0	\$ 0	\$ 0	2022	126,03	2019	103,80
1-may-20	31-may-20	\$ 11.373.700,00	30	\$ 13.809.513	\$ 115.079	2022	126,03	2019	103,80
1-jun-20	30-jun-20	\$ 11.373.700,00	30	\$ 13.809.513	\$ 115.079	2022	126,03	2019	103,80
1-jul-20	31-jul-20	\$ 11.373.700,00	30	\$ 13.809.513	\$ 115.079	2022	126,03	2019	103,80
1-ago-20	31-ago-20	\$ 11.373.700,00	30	\$ 13.809.513	\$ 115.079	2022	126,03	2019	103,80
1-sep-20	30-sep-20	\$ 11.373.700,00	30	\$ 13.809.513	\$ 115.079	2022	126,03	2019	103,80
1-oct-20	31-oct-20	\$ 11.373.700,00	30	\$ 13.809.513	\$ 115.079	2022	126,03	2019	103,80
1-nov-20	30-nov-20	\$ 1.691.600,00	30	\$ 2.053.876	\$ 17.116	2022	126,03	2019	103,80
1-dic-20	31-dic-20	\$ 1.000.000,00	30	\$ 1.214.162	\$ 10.118	2022	126,03	2019	103,80
1-ene-21	31-ene-21	\$ 0,00	30	\$ 0	\$ 0	2022	126,03	2020	105,48
1-feb-21	28-feb-21	\$ 3.649.985,00	30	\$ 4.361.088	\$ 36.342	2022	126,03	2020	105,48

Últimos 10 años laborados	
TOTAL DÍAS	3600
TOTAL SEMANAS	514,29

Toda la vida laboral	
TOTAL DÍAS	12618
TOTAL SEMANAS	1802,57

Ingreso Base de Liquidación -IBL-	\$ 7.516.401,61
Semanas Cotizadas	1.802,57
Tasa de reemplazo	76,36%
Valor pensión	\$ 5.739.780